



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA



ADMINISTRACIÓN
DE XUSTIZA

3T.S.X.GALICIA SALA DO SOCIAL A CORUÑA

PLAZA DE GALICIA S/N
15071 A CORUÑA
Tfno: 981-184 845/959/939
Fax:881-881133/981184853
Equipo/usuario: MB
NIG: 36057 44 4 2016 0003452
Modelo: 084000

TIPO Y N° DE RECURSO:RSU RECURSO SUPPLICACION 0002619 /2017-MRA

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000696 /2016 JDO.
DE LO SOCIAL n° 005 de VIGO

Recurrente/s: MANTELNOR LIMPIEZAS SL

Abogado/a: NOELIA MARIA MARTINEZ VIEITO

Procurador/a:

Graduado/a Social:

Recurrido/s: FOGASA, LIMPIEZAS DEL NOROESTE SA , CONCELLO DE VIGO (PONTEVEDRA) , ADMON CONCURSAL DE LIMPIEZAS NOROESTE (CONVENIA PROFESIONAL SLP)

Abogado/a: LETRADO DE FOGASA, LETRADO AYUNTAMIENTO , HENRIQUE LANDESA MARTINEZ , YOLANDA CAROLINA BARREIRO LORENZO

Procurador/a: JUAN ANTONIO GARRIDO PARDO

Graduado/a Social:

M. SOCORRO BAZARRA VARELA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DE LA SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA, DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en los citados autos se ha dictado resolución que literalmente dice:

ILMO SR. D. ANTONIO J. GARCIA AMOR
ILMA SR^a D^a BEATRIZ RAMA INSUA
ILMO SR. D. CARLOS VILLARINO MOURE

En A CORUÑA, a doce de febrero de dos mil dieciocho.

Tras haber visto y deliberado las presentes actuaciones, la T.S.X.GALICIA SALA DO SOCIAL, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

En el RECURSO SUPPLICACION 0002619 /2017, formalizado por el/la D/Dª NOELIA MARIA VIEITO MARTINEZ, en nombre y representación de MANTELNOR LIMPIEZAS SL, contra la sentencia número 181 /2017 dictada por XDO. DO SOCIAL N. 5 de VIGO en el procedimiento PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000696 /2016, seguidos a instancia de frente a FOGASA, LIMPIEZAS DEL NOROESTE SA, CONCELLO DE VIGO (PONTEVEDRA), ADMON CONCURSAL DE LIMPIEZAS NOROESTE (CONVENIA PROFESIONAL SLP), MANTELNOR LIMPIEZAS SL, siendo Magistrado-Ponente el/la Ilmo/a Sr/Sra D/Dª BEATRIZ RAMA INSUA.

De las actuaciones se deducen los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: D/Dª presentó demanda contra FOGASA, LIMPIEZAS DEL NOROESTE SA, CONCELLO DE VIGO (PONTEVEDRA), ADMON CONCURSAL DE LIMPIEZAS NOROESTE (CONVENIA PROFESIONAL SLP), MANTELNOR LIMPIEZAS SL, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, dictó la sentencia número 181/2017, de fecha treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete

SEGUNDO: En la sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos expresamente declarados probados: PRIMERO.- La actora, doña , provista del DNI , con antigüedad reconocida de 1 de junio de 1978 viene prestando servicios a tiempo completo como supervisora encargada de zona, estando adscrita a la contrata de limpieza en la Casa del Concello y demás dependencias municipales del ayuntamiento de Vigo./SEGUNDO.- La relación laboral está sometida al Convenio Colectivo provincial de Limpieza de Edificios e Locales de Pontevedra./TERCERO.- La actora pertenecía a la plantilla de la empresa Limpiezas del Noroeste, S.A. (Linorsa), como adjudicataria del servicio de limpieza en dichas instalaciones



municipales, hasta el 20 de abril de 2016 y con soporte en el contrato administrativo suscrito con la administración municipal el 14 de junio de 2013./CUARTO.- El día 29 de marzo de 2016 la empresa Linorsa solicitó del Ayuntamiento la cesión de ese contrato del servicio de limpieza en las oficinas municipales del Ayuntamiento de Vigo en favor de Mantelnor, S.L.U., que fue autorizada mediante Resolución de 11 de abril de 2016 conforme al informe-propuesta formulada el 7 de abril de 2016 por la jefa del servicio de contratación y conformada por el Concejal-delegado del Área de Contratación y titular de la asesoría jurídica por , en que se supeditaba la eficacia de la cesión a su formalización en escritura pública, precisando que la subrogación del cesionario en los derechos y obligaciones derivados del contrato se producirá desde la fecha de inicio de ejecución del mismo. En dicho informe, incorporado al texto de la Resolución de 11 de abril, se indicaba que teniendo en cuenta que el presente contrato tiene una plantilla numerosa de trabajadores con derecho a la subrogación, y que en caso de falta de pago de los salarios correspondientes a los mismos dicha administración debería responder de forma directa y solidaria (artículo 42 del ET) parecía contrario al interés público renunciar a que el cesionario se subrogue en la posición del contratista desde el inicio del contrato. Consecuentemente, la subrogación del cesionario en los derechos y obligaciones derivados del contrato producirá efectos desde la fecha de inicio de la ejecución del mismo./QUINTO.- Dicha cesión se instrumentó por escritura pública otorgada el 15 de abril de 2016, en que se pactó la subrogación de Mantelnor en todos los derechos y obligaciones de la cedente derivados de los contratos de servicios pendientes de ejecutar desde el 21 de abril de 2016, haciéndose responsable Linorsa de la parte de los contratos ejecutada por ella hasta el 20 de abril del pasado año eximiendo de toda responsabilidad a Mantelnor y, en especial, de cualquier reclamación de cantidad o indemnización en sentido amplio realizada por el personal contratado, AEAT,

TGSS, proveedores o subcontratistas./SEXTO.- Ese día 21 de abril de 2016 la actora, junto a otras compañeras adscritas a ese servicio, fue subrogada por la empresa Mantelnor Limpiezas, S.L., que le respetó los derechos y obligaciones laborales y la antigüedad que hasta la fecha tenía perfeccionada en dicho centro de trabajo como trabajadora de la empresa saliente y según el convenio vigente. Mantelnor no se aprovechó de ningún medio material procedente de Linorsa./SÉPTIMO.- Al momento de cesar en Linorsa, quedaban pendientes de liquidación las siguientes sumas: 1º paga de beneficios-marzo de 2015: 1.906 euros; 2º salario del mes de abril de 2016: 1.351,47 euros; 3º parte proporcional de paga extra de beneficios de 2016: 571,86 euros; 4º parte proporcional de paga extra de julio de 2016: 1.524,97 euros; 5º parte proporcional de paga extra de octubre de 2016: 41,25 euros; 6º parte proporcional de paga extra de navidad de 2016: 571, 86 euros; 7º vacaciones: 648,79 euros./OCTAVO.- Con posterioridad la actora ha percibido como crédito contra diversas cantidades, ascendiendo el monto de lo adeudado a 5.233 euros./NOVENO.- Presentada papeleta de conciliación el día 18 de julio do 2016, el acto tuvo lugar el 4 de agosto con el resultado de tenerse intentada sin avenencia y sin efecto. La demanda ha sido interpuesta el 10 de agosto de 2016./DÉCIMO.- La empresa Linorsa se halla en situación de concurso de acreedores en virtud de auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil N° 3 de Pontevedra de fecha 19 de abril de 2016, que ha designado como administradora concursal a la entidad Convenía Profesional SLP.

TERCERO: En la sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva: ESTIMAR PARCIALMENTE la demanda interpuesta por DOÑA
contra el CONCELLO DE VIGO, las empresas LIMPIEZAS
DEL NOROESTE, S.A. y MANTELNOR LIMPIEZAS, S.L.U., absolviendo por falta de legitimación pasiva ad causam al Concello de Vigo, S.A. y condenando solidariamente a las mercantiles



LIMPIEZAS DEL NOROESTE, S.A. y MANTELNOR LIMPIEZAS, S.L.U. abonar a la actora la suma de cinco mil doscientos treinta y tres euros (5.233€) junto con un interés por mora del 10% que en el caso de Linorsa será hasta la fecha de declaración del concurso de acreedores.

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por MANTELNOR LIMPIEZAS SL formalizándolo posteriormente. Tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.

QUINTO: Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en esta T.S.X.GALICIA SALA DO SOCIAL en fecha 14-6-2017.

SEXTO: Admitido a trámite el recurso se señaló el día 12-2-2017 para los actos de votación y fallo.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de Sala los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Recurre la parte codemandada, MANTELNOR LIMPIEZAS SLU, la sentencia de instancia, que acogió parcialmente la demanda rectora de los autos, solicitando la revocación de la misma y la desestimación de las pretensiones en su contra deducidas para lo cual, anuncia recurso de suplicación y lo interpone después solicitando, al amparo de la letra c) del artículo 193 de la Ley de la Jurisdicción Social, el examen de las normas sustantivas y de la jurisprudencia aplicada.

Antes de resolver los motivos de los recursos de suplicación planteados, debe la Sala pronunciarse sobre los documentos aportados por los actores al amparo de la vía

prevista en el art. 233 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Y así, sobre la base de que la unión de documentos en el ámbito de la suplicación -que puede tramitarse como un incidente en el que se oiga a las demás partes y se resuelva por auto motivado- se trata de un trámite que puede resolverse (sobre su admisión o no) en la propia sentencia -evitando así incurrir en dilaciones indebidas, toda vez que las demás partes, al haberseles dado traslado del escrito de unión de documentos, han podido realizar adecuadamente el trámite de alegaciones sobre la eventual admisión del mismo al realizar su impugnación, por lo que no quedan indefensas-, debe indicarse que la naturaleza excepcional del recurso de suplicación impide, por regla general, la introducción de hechos nuevos - distintos de los alegados y debatidos en la instancia-, ni tampoco la proposición de ningún medio probatorio nuevo. Consecuente a este predicado, el artículo 231 Ley de Procedimiento Laboral, hoy el 233 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, preceptúa que "la Sala no admitirá a las partes documento alguno, ni alegaciones de hechos que no resulten de los autos". Ahora bien, como excepción a este principio de carácter general -y sin duda, como concesión al ius litigatoris- ese mismo precepto seguidamente señala que, "No obstante, si alguna de las partes presentara alguna sentencia o resolución judicial o administrativa firmes o documentos decisivos para la resolución del recurso que no hubiera podido aportar anteriormente al proceso por causas que no le fueran imputables, y en general cuando en todo caso pudiera darse lugar a posterior recurso de revisión por tal motivo o fuera necesario para evitar la vulneración de un derecho fundamental, la Sala, oída la parte contraria dentro del plazo de tres días, dispondrá en los dos días siguientes lo que proceda". Debe recordarse aquí la interpretación que hace el Tribunal Supremo, en Sala General, en su sentencia de Sentencia de 5 diciembre (2007 RJ 2008\796), en torno a las previsiones del antiguo artículo 231 de la Ley de



Procedimiento Laboral (RCL 1995, 1144, 1563), a la luz de la nueva redacción de los artículos 270 y 271 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892): "1) Que en los recursos extraordinarios de suplicación y casación, incluido el de casación para la unificación de doctrina, los únicos documentos que podrán ser admitidos durante su tramitación serán los que tengan la condición formal de "sentencias o resoluciones judiciales o administrativas" firmes y no cualesquiera otros diferentes de aquellos. La admisión de dichos documentos viene igualmente condicionada a que: a) las sentencias o resoluciones hayan sido dictadas o notificadas en fecha posterior al momento en que se llevaron a cabo las conclusiones en el juicio laboral de instancia. b) que serán admisibles si, además, por su objeto y contenido aparecieran como condicionantes o decisivas para resolver la cuestión planteada en la instancia o en el recurso, y c) en el caso de que no se trate de documentos de tal naturaleza o calidad, deberán ser rechazados de plano, y serán devueltos a la parte que los aportó, sin que puedan por lo tanto ser tenidos en cuenta para la posterior resolución que haya de dictar la Sala. 2) Los documentos que por reunir aquellos requisitos previos hayan sido admitidos y unidos a los autos producirán el efecto pretendido por la parte sólo en el caso de que la producción, obtención o presentación de los mismos no tenga su origen en una actuación dolosa, fraudulenta o negligente de la propia parte que pretende aportarlos; lo cual será valorado en la resolución (auto o sentencia) que proceda adoptar en definitiva. 3) Cuando el documento o documentos aportados reúna todas las anteriores exigencias la Sala valorará en cada caso "el alcance del documento

En el presente caso el documento incorporado con el recurso no cumple los requisitos anteriormente mencionados de acuerdo con lo dispuesto en el art 233 de la Ley 36/2011, de 10 de Octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, que por ello ha de ser rechazado.

SEGUNDO.- Con amparo procesal en el art. 193.c) LRJS, denuncia como infringidos el art 2 de la Ley de Contratos del Sector Publico. Los art. 10 y 17 del Convenio colectivo del sector de limpieza de edificios y locales y art 17 del Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de la Provincia de Pontevedra en relación con el art. 1137 del CC y con la doctrina contenida en las STS 10/5/16 y 1/06/16 sobre la responsabilidad por deudas de la empresa saliente argumentando, en esencia, que, de una parte, la subrogación en la contrata producida en favor de la recurrente es una subrogación que opera por imposición del convenio colectivo y que conforme al mismo no existe responsabilidad de la empresa sucesora por las deudas previas de la empresa saliente y que no existe tampoco responsabilidad solidaria impuesta en la norma convencional aplicable. Y que no hay sucesión de empresa. Y que los efectos de la autorización administrativa solo operan en el ámbito de las relaciones entre cedente, Administración, y cesionario y los trabajadores resultan ajenos a estas relaciones.

PRIMERO.- Recurre la parte codemandada, MANTELNOR LIMPIEZAS SLU, la sentencia de instancia, que acogió la demanda rectora de los autos, y condenó solidariamente a las empresas Limpiezas del Noroeste S.A y Mantelnor Limpiezas SLU, a responder solidariamente del abono de la cantidad de 3.451,05 euros a la demandante, solicitando la revocación de la misma y la desestimación de las pretensiones en su contra deducidas para lo cual, anuncia recurso de suplicación y lo interpone después solicitando, al amparo de la letra b) del artículo 193 de la Ley de la Jurisdicción Social, la revisión de los hechos probados, y, al amparo de su letra c), el examen de las normas sustantivas y de la jurisprudencia aplicada.

Antes de resolver los motivos de los recursos de suplicación planteados, debe la Sala pronunciarse sobre los documentos aportados por los actores al amparo de la vía



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

prevista en el art. 233 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Y así, sobre la base de que la unión de documentos en el ámbito de la suplicación -que puede tramitarse como un incidente en el que se oiga a las demás partes y se resuelva por auto motivado- se trata de un trámite que puede resolverse (sobre su admisión o no) en la propia sentencia -evitando así incurrir en dilaciones indebidas, toda vez que las demás partes, al haberseles dado traslado del escrito de unión de documentos, han podido realizar adecuadamente el trámite de alegaciones sobre la eventual admisión del mismo al realizar su impugnación, por lo que no quedan indefensas-, debe indicarse que la naturaleza excepcional del recurso de suplicación impide, por regla general, la introducción de hechos nuevos -distintos de los alegados y debatidos en la instancia-, ni tampoco la proposición de ningún medio probatorio nuevo. Consecuente a este predicado, el artículo 231 Ley de Procedimiento Laboral, hoy el 233 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, preceptúa que "la Sala no admitirá a las partes documento alguno, ni alegaciones de hechos que no resulten de los autos". Ahora bien, como excepción a este principio de carácter general -y sin duda, como concesión al ius litigatoris- ese mismo precepto seguidamente señala que, "No obstante, si alguna de las partes presentara alguna sentencia o resolución judicial o administrativa firmes o documentos decisivos para la resolución del recurso que no hubiera podido aportar anteriormente al proceso por causas que no le fueran imputables, y en general cuando en todo caso pudiera darse lugar a posterior recurso de revisión por tal motivo o fuera necesario para evitar la vulneración de un derecho fundamental, la Sala, oída la parte contraria dentro del plazo de tres días, dispondrá en los dos días siguientes lo que proceda". Debe recordarse aquí la interpretación que hace el Tribunal Supremo, en Sala General, en su sentencia de Sentencia de 5 diciembre (2007 RJ 2008\796), en torno a las previsiones del antiguo artículo 231 de la Ley de

Procedimiento Laboral (RCL 1995, 1144, 1563), a la luz de la nueva redacción de los artículos 270 y 271 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892): "1) Que en los recursos extraordinarios de suplicación y casación, incluido el de casación para la unificación de doctrina, los únicos documentos que podrán ser admitidos durante su tramitación serán los que tengan la condición formal de "sentencias o resoluciones judiciales o administrativas" firmes y no cualesquiera otros diferentes de aquellos. La admisión de dichos documentos viene igualmente condicionada a que: a) las sentencias o resoluciones hayan sido dictadas o notificadas en fecha posterior al momento en que se llevaron a cabo las conclusiones en el juicio laboral de instancia. b) que serán admisibles si, además, por su objeto y contenido aparecieran como condicionantes o decisivas para resolver la cuestión planteada en la instancia o en el recurso, y c) en el caso de que no se trate de documentos de tal naturaleza o calidad, deberán ser rechazados de plano, y serán devueltos a la parte que los aportó, sin que puedan por lo tanto ser tenidos en cuenta para la posterior resolución que haya de dictar la Sala. 2) Los documentos que por reunir aquellos requisitos previos hayan sido admitidos y unidos a los autos producirán el efecto pretendido por la parte sólo en el caso de que la producción, obtención o presentación de los mismos no tenga su origen en una actuación dolosa, fraudulenta o negligente de la propia parte que pretende aportarlos; lo cual será valorado en la resolución (auto o sentencia) que proceda adoptar en definitiva. 3) Cuando el documento o documentos aportados reúna todas las anteriores exigencias la Sala valorará en cada caso "el alcance del documento

En el presente caso el documento incorporado con el recurso no cumple los requisitos anteriormente mencionados de acuerdo con lo dispuesto en el art 233 de la Ley 36/2011, de 10 de Octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, que por ello ha de ser rechazado.



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTIZIA

SEGUNDO.- Respecto a lo primero, esto es, la revisión de los hechos probados, se pretende alterar:

1º/ añadiendo un nuevo hecho probado cuarto, del siguiente tenor literal:

El Concello de Vigo, mediante resolución administrativa, procedió a la cesión del contrato de limpieza de los colegios públicos y escuelas municipales de Vigo, proponiendo el informe municipal que la subrogación tuviera efectos desde el inicio de la ejecución del contrato, teniendo en cuenta que en caso de falta de pago de los salarios correspondientes a los trabajadores esta administración deberá responder de forma directa y solidaria (art. 42.2 LET) así como de forma subsidiaria de las cuotas de seguridad social; cita en apoyo de tal propuesta los documentos obrantes en autos a los folios 2 y 4 de la prueba del Concello de Vigo."

Se ampara en los documentos 2 y 4 de la prueba de la codemandada Concello de Vigo.

2º/ Y para el ordinal séptimo, propone: adicionar a continuación de: (..) proveedores ou contratistas la expresión "(..) Na clausula quinta da referida escritura prevese que: MANTELNOR LIMPIEZAS SL subrogara de acuerdo con el art. 19 del Convenio colectivo de edificios y locales de la Provincia de Pontevedra, a partir del 21 de abril de 2016 a los trabajadores relacionados en el ANEXO N° 3 y que se encuentran adscritos al referido servicio,"

Se ampara en el doc. N° 15 de su ramo de prueba.

La respuesta ha de ser la misma que ya dimos en nuestra sentencia de Roj: STSJ GAL 6052/2017-ECLI:ES:TSJGAL:2017:6052. Sección: 1. N° de Recurso: 1755/2017. Fecha de Resolución: 19/09/2017 haciendo nuestros

los argumentos que en ella se contienen y concretamente en cuanto a que dice que:

De conformidad con la doctrina del Tribunal Supremo en materia de revisión de hechos probados, tal y como se puede apreciar en la SS.TS 4ª de 18/2/2014 y las que cita de 3/7/2013, (RC 88/11), 4/5/2013, (RC 285-11) y 5/6/2011, (RC 158/2010), que fijan los requisitos para la modificación del relato de hechos, tanto en suplicación como en casación, partiendo del carácter extraordinario de estos recursos, se exige la concurrencia de los siguientes requisitos: 1º.- Que se indiquen qué hechos han de adicionarse, rectificarse o suprimirse, sin que en ningún caso bajo esta delimitación conceptual fáctica puedan incluirse normas de derecho o su exégesis. 2º.- Que se citen concretamente la prueba documental que, por sí sola, demuestre la equivocación del juzgador, de una manera manifiesta, evidente y clara. 3º.- Que se precisen los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento; y 4º.- Que tal variación tenga trascendencia para modificar el fallo de instancia (entre las más recientes, SSTS 14 mayo 2013 -rcud. 285/2011 - o 17 enero 2011 -rec. 75/2010); doctrina de antiguo recogida en similares términos en la STS de 25-3-1998 . 5º.- No es posible admitir la revisión fáctica de la sentencia impugnada con base en las mismas pruebas que la sirvieron de fundamento, en cuanto no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el juzgador, por un juicio valorativo personal y subjetivo de la parte interesada (STS 16 de diciembre de 1967 , 18 y 27 de marzo de 1968 , 8 y 30 de junio de 1978 , y 2 de mayo de 1985).

La aplicación de la doctrina expuesta a las propuestas de revisión que se efectúan implica el rechazo de las mismas por cuanto, la propuesta para el ordinal cuarto no se explica si se pretende suprimir su contenido -lo que



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTIZIA

ocurriría tal y como se efectúa-, adicionar la propuesta a lo que consta en el mismo o adicionar tal proposición como número bis, y como sustituir la redacción existente por la propuesta es inadmisibile dado que lo allí constatado lo es por indiscutido (Fundamento de derecho segundo) y la propuesta no lo contradice no cabe su sustitución; como adición a lo que ya consta es inútil e innecesaria por cuanto en el ordinal sexto de probados ya consta lo decidido por el Concello de Vigo, siendo la propuesta una inútil reiteración, al tiempo que se funda en los documentos expresamente valorados por el juzgador de instancia que los tiene por reproducidos en dicho ordinal sexto, por lo tanto se rechaza.

En cuanto a la modificación/adición al ordinal séptimo incurre en el defecto de pretender valorar el mismo documento que el juzgador de instancia expresamente examinó y valoró y que da íntegramente por reproducido en dicho ordinal por lo tanto la propuesta es manifiestamente inútil y reiterativa, por ello se rechaza igualmente.

SEGUNDO.- En sede jurídica, con amparo procesal en el art. 193.c) LRJS, denuncia como infringidos el art. 10 y 17 del Convenio colectivo del sector de limpieza de edificios y locales y art 17 del Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de la Provincia de Pontevedra, en relación con el art. 1.137 del CC y con la doctrina contenida en las STS 10/5/16 y 1/06/16 sobre la responsabilidad por deudas de la empresa saliente argumentando, en esencia, que, de una parte, la subrogación en la contrata producida en favor de la recurrente es una subrogación basada en el convenio colectivo y que conforme al mismo no existe responsabilidad de la empresa sucesora por las deudas previas de la empresa saliente y que no existe tampoco responsabilidad solidaria impuesta en la norma convencional aplicable.

La resolución de instancia, parte de considerar que la sucesión de contratas exige la extinción de una contrata y la realización de otra nueva, por lo que considera que, al no haberse producido la extinción de la contrata anterior en vigor, no existe sucesión y por lo tanto la entrante es continuadora de la contrata en posición del empleador saliente y con responsabilidad por las deudas salariales de aquella, de forma solidaria con la misma.

Y respecto de este punto, tal como resolvimos en nuestra sentencia de Roj: STSJ GAL 6052/2017-ECLI:ES:TSJGAL:2017:6052. Sección: 1. N° de Recurso: 1755/2017. Fecha de Resolución: 19/09/2017, estimamos que dicha premisa es errónea por cuanto, de una parte, el I Convenio colectivo sectorial de limpieza de edificios y locales de aplicación en todo el territorio y que se reserva ex art. 10.2 la regulación de la subrogación de personal, en su art. 17.1 señala, en todos los supuestos de finalización, pérdida, rescisión, cesión o rescate de una contrata así como respecto de cualquier otra figura o modalidad que suponga el cambio en el adjudicatario del servicio que lleven a cabo la actividad de que se trate, los trabajadores de la empresa saliente pasaran a ...; regulando a continuación los supuestos de subrogación del personal de la empresa saliente -no discutidos aquí-, y de la literalidad de dicho precepto convencional no cabe más que concluir que la norma es aplicable no solo a los supuestos de finalización ordinaria de la contrata (normalmente por vencimiento de su duración) sino también en los supuestos de finalización como son la pérdida de la contrata, la rescisión de la misma y el supuesto de cesión voluntaria de la contrata por la contratista a otro contratista o subcontratista, siendo así que en este último caso no existe extinción de la contrata pero se aplica la sucesión de contrata por imperativo del citado precepto; por otra parte, la premisa de que se parte exigiría que la extinción de la contrata finalizada implicara el cese en la actividad de los trabajadores adscritos a la



misma lo cual no ocurre habitualmente sino que se produce una continuidad en las contrataciones sin solución de la continuidad en la prestación de los servicios por parte de los trabajadores subrogados, lo que igualmente acontece en el presente supuesto;



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Por otra parte estimamos que el pacto entre empresa saliente y entrante se remite expresamente al art. 17 (sic) del Convenio Colectivo de limpieza de edificios y locales de la Provincia de Pontevedra..

TERCERO.- La particularidad que presenta el supuesto de autos, se centra en que la Junta de Gobierno Local del Concello de Vigo adoptó en fecha 11 de abril de 2016 dos acuerdos, aportados como documentos nº 2 y 4 por la demandada Concello de Vigo en los que autorizo, respectivamente, la cesión de los contratos de limpieza de la Casa do Concello y demás dependencias municipales y del servicio de limpieza de los Colegios Públicos y Escuelas Municipales del Concello de Vigo en los que se indicó expresamente que "A subrogación de cesionario nos derechos e obrigas derivados do contrato producirase dende a data do inicio da execución do mesmo" (documentos nº 2 e 4 de los aportados por la demandada Concello de Vigo"

Y en este punto tenemos que traer a colación lo dispuesto en la reciente sentencia de fecha STS, Social sección 1 del 12 de diciembre de 2017 (ROJ: STS 4773/2017 - ECLI:ES:TS:2017:4773) Sentencia: 983/2017 Recurso: 668/2016 en la que concretamente se expone: " la cuestión de autos se reduce a dilucidar si la inclusión de las previsiones del art. 120 TRLCSP en el pliego de condiciones del concurso de autos, tras cuya licitación se adjudicó el servicio de mantenimiento a «Fulton Servicios Integrales, SA», tuvo un alcance meramente informativo [tesis de la recurrida] o comportó la imposición de la obligación de subrogarse en los

contratos de los trabajadores de la precedente adjudicataria del servicio, «Elsamex, SA» [conclusión de la referencial]. Y nuestra conclusión es del todo coincidente con la Sala de Castilla/La Mancha, por cuanto que:

a).- Para empezar, recordemos los términos en que se expresa el art. 120 LCSP, refiriendo literalmente que «[en aquellos contratos que impongan al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, el órgano de contratación deberá facilitar a los licitadores, en el propio pliego o en la documentación complementaria, la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte necesaria para permitir la evaluación de los costes laborales que implicará tal medida».

b).- La redacción no ofrece más interpretación razonable que la efectuada por la decisión recurrida, puesto que el precepto no hace sino imponer a la Administración pública contratante una obligación, la de informar a los licitadores de una posible subrogación empresarial, que lógicamente ha de ser la impuesta -de concurrir sus presupuestos- por disposición legal o convencional. De esta manera, la norma ofrece cualidad meramente instrumental respecto de una posible obligación sucesoria, por lo que la inclusión de tal información en el pliego de condiciones, no crea obligación alguna para los licitadores en el concurso sino que sólo les informa de las posibles consecuencias laborales de la adjudicación, precisamente cuando las prescripciones legales o convencionales «impongan al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador».

c).- Si ya la literalidad de la norma lleva a la referida conclusión, con mayor motivo la misma ha de imponerse cuando la propia Administración pública codemandada manifiesta -[FJ Cuarto de la sentencia del J/S, con valor de HDP: recientes,



SSTS 02/06/16 -rco 136/15 -; 22/06/16 -rco 250/15 -; y SG 26/10/16 -rcud 2913/14 -] que con la inclusión de los datos de los trabajadores en el Anexo no pretendía establecerse obligación subrogatoria, sino proporcionar información, pues no cabe olvidar que en la interpretación de los contratos tiende a deducir la intención común de las partes y que - conforme a la regla subsidiaria prevista en el art. 1282 CC - precisamente para los supuestos en que existan dudas y las mismas no puedan resolverse por las usuales reglas hermenéuticas [gramatical; lógica; sistemática], ha de atenderse -para juzgar de la intención de los contratantes- «a los actos de éstos, coetáneos y posteriores al contrato» [sin excluir los anteriores: SSTS 30/03/74 Ar. 1208 ; y 12/11/84 Ar. 5548], conjugándolos con los principios de la buena fe y justicia material [STS 30/01/91 -infracción de ley- Ar. 196]» (STS 20/04/17 -rco 192/16 -). Y si quien impuso las condiciones contractuales del concurso -la Administración- manifiesta que simplemente informaba, ante una eventual obligación subrogatoria impuesta por la ley o el convenio colectivo de aplicación, y que no tenía intención alguna de imponerla a la empresa que finalmente resultase adjudicataria, está claro que desconocer esta voluntad contractual no se ajusta a la normativa que se dice infringida.

d).- A destacar -finalmente- que esa función meramente informativa del art. 120 TR LCSP -aplicable en autos- se evidencia aún más claramente en la no vigente todavía Ley 9/2017 [8/Noviembre], de «Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014» [BOE 272, de 9/Noviembre/2017], en cuyo art 130.1 se dispone -bajo el epígrafe «Información sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo»- que «Cuando una norma legal un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general, imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse

como empleador en determinadas relaciones laborales, los servicios dependientes del órgano de contratación deberán facilitar a los licitadores, en el propio pliego, la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación...». Redacción que pone de manifiesto que la constancia de los datos de los trabajadores de la empresa saliente no se hace a efectos de imponer a la nueva adjudicataria la obligación de subrogarse en sus contratos, sino tan sólo para el supuesto -que la Administración ni tiene porqué conocer ni con la sola información pretende imponer- de que normativa o convencionalmente esté dispuesto el fenómeno subrogatorio. Y es reiterada doctrina de la Sala que las normas posteriores, aunque sean inaplicables por razones temporales, cumplen una evidente función orientadora, pudiendo «influir» el pronunciamiento de la Sala, en orden a una interpretación acorde con los principios inspiradores de la norma posterior (SSTS 22/03/02 -rc 1170/01 -; ... 06/07/16 - rcud 530/14 -; y 29/03/17 -rc 133/16 -).

CUARTO.- En atención a lo anteriormente expuesto, no ofrece duda ya que en el presente supuesto la subrogación se produce por acuerdo convencional, y como resolvimos en resolución de esta misma Sala en un supuesto idéntico al de autos, de otro compañero del demandante (anteriormente citada), la subrogación del personal por la empresa entrante por causa convencional no impone, a diferencia del art. 44.3 del Estatuto de los Trabajadores, la obligación de responder de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido satisfechas, tal y como resulta de la jurisprudencia contenida en las STS 3 y 10 de mayo, 1 de junio de 2016, según la cual:

“...en supuestos como el presente no estamos ante la sucesión de empresas regulada en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Esta Sala, a partir de la STS de 5 de



abril 1993, rec. 702/92, ha señalado, a propósito de la subrogación establecida en el precepto referido, que «ni la contrata ni la concesión administrativa son unidades productivas autónomas a los efectos del artículo 44 ET, salvo entrega al concesionario o al contratista de la infraestructura u organización empresarial básica para la explotación». Por ello, para garantizar en la medida de lo posible la continuidad en el empleo, en los convenios colectivos se suelen acordar, para el caso de la sucesión de contratistas en las que no se produce el fenómeno de la transmisión previsto en el artículo 44 ET, unas denominadas cláusulas subrogatorias que establecen importantes garantías de empleo para los trabajadores afectados a través de la imposición de la obligación de la empresa entrante de subrogarse en los trabajadores de la saliente adscritos a la contrata. La validez de estas cláusulas no ha venido admitiendo duda alguna porque si el supuesto de hecho a que se refieren queda excluido del artículo 44 ET, resulta perfectamente válido que la autonomía colectiva favorezca la continuidad de las relaciones laborales afectas a un servicio que permanece y que ese favorecimiento se realice en unas concretas y determinadas condiciones que son fruto del acuerdo logrado a través de la negociación colectiva.

De esta manera, en los supuestos de sucesión de contratistas la subrogación no opera en virtud del mandato estatutario - artículo 44 ET - si no se ha producido una transmisión de activos patrimoniales o una sucesión de plantillas, en aquellos sectores en los que la actividad descansa fundamentalmente en la mano de obra - STS de 27 de octubre de 2004, rec. 899/02, que recoge la doctrina comunitaria-. El artículo 44.3 ET establece la responsabilidad solidaria de ambas empresas a las transmisiones por actos inter vivos durante tres años por obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido satisfechas. Se trata, pues, de una previsión específica

incorporada por el legislador español que, yendo más allá del comunitario, ha establecido que en los casos de sucesión empresarial no sólo se produce la subrogación de la nueva en los derechos y obligaciones del anterior respecto los trabajadores cedidos, sino que ha mantenido la responsabilidad solidaria de ambas empresas respecto de las deudas laborales que la empresa cedente tuviera pendientes de abonar (SSTS de 15 de julio de 2003, rcud. 3442/2001 y 4 de octubre de 2003, rcud. 585/2003 , entre otras).

Ahora bien, cuando no se dan los requisitos legalmente previstos, la subrogación puede producirse por mandato del convenio colectivo y para estos supuestos no se aplica el régimen previsto en la Ley, sino el previsto en el convenio con sus requisitos y consecuencias de la cláusula del convenio aplicable; la subrogación sólo se producirá si se cumplen las exigencias previstas en el convenio y con los efectos que allí se dispongan.

Así, la ya lejana STS de 10 de diciembre de 1997, rec. 164/1997 señaló que: «en los supuestos de sucesión de contratadas la pretendida transmisión de contratadas, no es tal, sino finalización de una contrata y comienzo de otra, formal y jurídicamente distinta, con un nuevo contratista, aunque materialmente la contrata sea la misma, en el sentido de que son los mismos servicios los que se siguen prestando, de ahí, que para que la subrogación del nuevo contratista en los contratos de los trabajadores de la antigua se produzca tenga que venir impuesto por norma sectorial eficaz que así lo imponga o por el pliego de condiciones que pueda establecerla, aceptada por el nuevo contratista;

Referida a empresas de limpieza, la STS de 23 de mayo de 2005, rec. 1674/2004, señaló que «en las contratadas sucesivas de servicio como el de limpieza, en las que lo que se transmite no es una empresa ni una unidad productiva con



autonomía funcional, sino de un servicio carente de tales características, no opera, por ese solo hecho, la sucesión de empresas establecida en el artículo 44 ET, sino que la misma se producirá o no, de conformidad con lo que al efecto disponga el convenio colectivo de aplicación, y con subordinación al cumplimiento por las empresas interesadas de los requisitos exigidos por tal norma convenida».

La STS de 20 de septiembre de 2006, rec. 3671/2005 , referida a un supuesto de sucesión de contratadas de seguridad, reiteró que «en los supuestos de mera sucesión de contratadas, sin transmisión de elementos patrimoniales, no existe una transmisión empresarial en los términos que se regulan en el artículo 44 ET ... [por lo que]... la posible subrogación de la empresa entrante con relación a los derechos y obligaciones laborales de la saliente, de producirse, no lo sería por aplicación de tales normas sino con fundamento en el convenio colectivo aplicable a cuyos presupuestos, extensión, y límites debe estarse».

Con tales fundamentos, la sentencia del STS de 24 de julio de 2013, rec. 3228/2012, ha señalado con rotundidad en un supuesto en el que se ventilaba la aplicación del artículo 14 del Convenio Estatal de Empresas de Seguridad , que «En el asunto examinado, como anteriormente se ha consignado, no estamos ante la sucesión de empresas regulada en el artículo 44 ET pues no se ha producido transmisión de activos materiales ni tampoco sucesión de plantillas, por lo que la única vía por la que, en su caso, procedería imponer la subrogación a la empresa entrante, respecto a los trabajadores de la saliente, sería la establecida en el convenio colectivo aplicable y con los requisitos y límites que el mismo establece».

Y como asimismo recientemente señalo el TS Sala de lo Social Roj: STS 3168/2017 - ECLI:ES:TS:2017:3168. Sección: 1

Nº de Recurso: 2883/2016 . Nº de Resolución: 621/2017 de fecha 13/07/2017, en la que se estudiaba una cláusula de extensión de la responsabilidad, pactando la solidaridad, y concretamente en relación con el Convenio Provincial de Limpieza de Pontevedra, pues como dice la referida sentencia la cuestión a estudio consiste en determinar si en un supuesto de subrogación empresarial por sucesión de contratadas operada por mandato del convenio colectivo, en el que se exonera de responsabilidad a la empresa entrante por deudas salariales contraídas por la saliente antes de la transmisión, la empresa que se hace cargo de la plantilla en aplicación de las obligaciones derivadas del convenio ha de responder o no de aquéllas deudas salariales. Y en la que se llega a la conclusión de que de no haber previsión concreta en el convenio colectivo respecto de este extremo, la solidaridad no puede apreciarse, desplegando toda su eficacia la cláusula de exoneración.

Como se desprende de los hechos probados de la resolución de instancia, las codemandadas Limpiezas del Noroeste S.A. y Mantelnor Limpiezas S.L.U. elevaron con fecha 15 de abril de 2016 a escritura pública los acuerdos de cesión dos contratos autorizados por el Concello de Vigo. En esa escritura y en la diligencia que la complementa del día 21 de abril de 2016 se hace constar por ambas empresas que Mantelnor Limpiezas S.A. se subroga en todos los derechos y obligaciones de Linorsa que se deriven de los contratos pendientes de ejecutar desde el 21 de abril de 2016 y que Linorsa se hace totalmente responsable de la parte de los contratos ejecutada por ella hasta el 20 de abril de 2016 eximiendo de toda responsabilidad a la compañía Mantelnor y en especial, de cualquier reclamación de cantidad o indemnización en sentido amplio realizada por el personal contratado, AEAT, TXSS, proveedores o subcontratistas.



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Excluida por tanto la aplicabilidad en el presente caso del art. 44 ET, hemos de tener en cuenta la regulación convencional que del problema suscitado contiene el artículo 17 del Convenio Provincial de Limpieza de Pontevedra, que bajo el epígrafe "Adscripción de personal", establece de manera detallada la características y el proceso de la subrogación en los trabajadores de la empresa saliente que deberá llevar a cabo la entrante al término de la concesión de una contrata de limpieza, desde la perspectiva general de que la empresa entrante se subrogará en todos los derechos y obligaciones referidos a los trabajadores, siempre que concurran los presupuestos que esa disposición establece, entre los que se detalla la documentación que habrá de entregarse -punto quinto-- y entre ella, en el inciso final se dice que se habrá de proporcionar "Copia de documentos debidamente diligenciados por cada trabajador afectado en el que se haga constar que éste recibió de la empresa saliente su liquidación de partes proporcionales de sus haberes hasta el momento de la subrogación, no quedando pendiente cantidad alguna."

Como señala el TS de tales normas se infiere únicamente que el nuevo contratista tiene la obligación de respetar las condiciones laborales que tenían fijadas los trabajadores con el contratista anterior, no que se garantice una responsabilidad solidaria para la satisfacción de las deudas contraídas por el empresario anterior. Y dado el texto de la escritura pública referida, no constando en el Convenio Colectivo norma alguna que contradiga las afirmaciones que en la misma se contienen, los criterios doctrinales contenidos en la sentencias precitadas son plenamente aplicables al presente supuesto, lo que implica que la recurrente no viene obligada a asumir la responsabilidad frente a la parte actora por deudas de la empresa saliente, lo que en atención al principio de tutela judicial efectiva, siendo la misma cuestión la debatida, se ha de mantener el mismo criterio que el allí sustentado; Criterio que asimismo sustentamos en

anterior sentencia de este STSJ, Social sección 1 del 20 de octubre de 2017 (ROJ: STSJ GAL 6686/2017 - ECLI:ES:TSJGAL:2017:6686) Recurso: 1853/2017).

La estimación del motivo conlleva la absolución de la recurrente, e implica que la responsable de la indiscutida deuda es la empresa saliente a quien debe condenarse al pago de la misma junto con su administración concursal, con los intereses del art. 29.3 LET y al FONDO DE GARANTIA SALARIAL en la medida legal y reglamentaria correspondiente. Y la estimación del recurso conlleva la devolución del depósito constituido para recurrir así como que se alcen los aseguramientos prestados una vez firme esta resolución (art. 204 LRJS). Todo ello sin costas. Por todo lo expuesto,

F A L L A M O S

Que estimamos el recurso de suplicación formulado por MANTELNOR LIMPIEZAS SL contra la sentencia dictada el 31/03/17 por el Juzgado de lo Social N° 5 de VIGO en autos N° 696-16 sobre CANTIDADES y con revocación de dicha resolución desestimamos la demanda rectora de los autos frente a MANTELNOR LIMPIEZAS SL y en consecuencia condenamos al pago de las cantidad reclamada de 5.233 euros a LIMPIEZAS NOROESTE SAU y a su administradora CONCURSAL CONVENIA PROFESIONAL SLP a estar y pasar por tal condena y al FONDO DE GARANTIA SALARIAL en forma y medida reglamentaria para el supuesto de insolvencia de la condenada, manteniendo la absolución del CONCELLO DE VIGO.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta T.S.X.GALICIA SALA DO SOCIAL

MODO DE IMPUGNACIÓN: Se hace saber a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de Casación para Unificación de Doctrina que ha de prepararse mediante escrito



presentado ante esta Sala dentro del improrrogable plazo de diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de la sentencia. Si el recurrente no tuviera la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad social deberá efectuar:

- El depósito de 600 € en la cuenta de 16 dígitos de esta Sala, abierta en el Banco de SANTANDER (BANESTO) con el nº **1552 0000 37 seguida del cuatro dígitos correspondientes al nº del recurso y dos dígitos del año del mismo.**

- Asimismo si hay cantidad de condena deberá consignarla en la misma cuenta, pero con el código **80** en vez del 37 ó bien presentar aval bancario solidario en forma.

- Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria desde una cuenta abierta en cualquier entidad bancaria distinta, habrá que emitirla a la cuenta de veinte dígitos **0049 3569 92 0005001274** y hacer constar en el campo "Observaciones ó Concepto de la transferencia" los 16 dígitos que corresponden al procedimiento (**1552 0000 80 ó 37 **** ++**).

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos

Concuerta bien y fielmente con su original al que me remito, y para que surta los efectos oportunos, expido el presente que firmo en A CORUÑA, a doce de febrero de dos mil dieciocho. Doy fe.

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTIZIA

XDO. DO SOCIAL N. 5 VIGO

PROCEDIMIENTO: PO 696/2016

SENTENCIA: 00181/2017

SENTENCIA

En Vigo, a 31 de marzo de 2017.

Vistos por mí, don Diego de Lara Alonso-Burón, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social Número Cinco de esta ciudad, los presentes autos sobre Reclamación de Cantidad seguidos a instancia de doña _____, bajo la dirección del letrado don Henrique Landesa Martínez, contra el Concello de Vigo, actuando representado por la Procuradora doña María Jesús Nogueira Fos, contra la empresa Limpiezas del Noroeste, S.A., que no ha comparecido al acto del juicio, contra la empresa Mantelnor Limpiezas, S.L.U., bajo la representación y defensa letrada de doña Noelia María Martínez Vieito, con la intervención de Convenia Profesional SLP, como administradora concursal de Limpiezas del Noroeste, S.A., representada por la letrada doña Yolanda Barreiro Lorenzo, y la convocatoria del Fondo de Garantía Salarial, que no ha comparecido al acto del juicio, procede dictar la presente resolución en base a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 9 de agosto de 2016 tuvo entrada en este Juzgado de lo Social demanda presentada por la referida parte en la que, tras exponer los hechos y los fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminaba solicitando que se dictase sentencia de conformidad con el suplico de la demanda.

SEGUNDO.- Admitida a trámite dicha demanda, se convocó a las partes a juicio, el cual se celebró en todas sus fases el día 21 de marzo de 2017 con el resultado que consta en acta, quedando los autos conclusos para sentencia.

HECHOS DECLARADOS PROBADOS

PRIMERO.- La actora, doña _____, provista del DNI _____, con antigüedad reconocida de 1 de junio de 1978 viene prestando servicios a tiempo completo como supervisora encargada de zona, estando adscrita a la contrata de limpieza en la Casa del Concello y demás dependencias municipales del Ayuntamiento de Vigo.



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTIZIA

SEGUNDO.- La relación laboral está sometida al Convenio Colectivo provincial de Limpieza de Edificios e Locales de Pontevedra.

TERCERO.- La actora pertenecía a la plantilla de la empresa Limpiezas del Noroeste, S.A. (Linorsa), como adjudicataria del servicio de limpieza en dichas instalaciones municipales, hasta el 20 de abril de 2016 y con soporte en el contrato administrativo suscrito con la administración municipal el 14 de junio de 2013.

CUARTO.- El día 29 de marzo de 2016 la empresa Linorsa solicitó del Ayuntamiento la cesión de ese contrato del servicio de limpieza en las oficinas municipales del Ayuntamiento de Vigo en favor de Mantelnor, S.L.U., que fue autorizada mediante Resolución de 11 de abril de 2016 conforme al informe-propuesta formulada el 7 de abril de 2016 por la jefa del servicio de contratación y conformada por el Concejal-delegado del Área de Contratación y titular de la asesoría jurídica por , en que se supeditaba la eficacia de la cesión a su formalización en escritura pública, precisando que la subrogación del cesionario en los derechos y obligaciones derivados del contrato se producirá desde la fecha de inicio de ejecución del mismo. En dicho informe, incorporado al texto de la Resolución de 11 de abril, se indicaba que teniendo en cuenta que el presente contrato tiene una plantilla numerosa de trabajadores con derecho a la subrogación, y que en caso de falta de pago de los salarios correspondientes a los mismos dicha administración debería responder de forma directa y solidaria (artículo 42 del ET) parecía contrario al interés público renunciar a que el cesionario se subroge en la posición del contratista desde el inicio del contrato. Consecuentemente, la subrogación del cesionario en los derechos y obligaciones derivados del contrato producirá efectos desde la fecha de inicio de la ejecución del mismo.

QUINTO.- Dicha cesión se instrumentó por escritura pública otorgada el 15 de abril de 2016, en que se pactó la subrogación de Mantelnor en todos los derechos y obligaciones de la cedente derivados de los contratos de servicios pendientes de ejecutar desde el 21 de abril de 2016, haciéndose responsable Linorsa de la parte de los contratos ejecutada por ella hasta el 20 de abril del pasado año eximiendo de toda responsabilidad a Mantelnor y, en especial, de cualquier reclamación de cantidad o indemnización en sentido amplio realizada por el personal contratado, AEAT, TGSS, proveedores o subcontratistas.

SEXTO.- Ese día 21 de abril de 2016 la actora, junto a otras compañeras adscritas a ese servicio, fue subrogada por la empresa Mantelnor Limpiezas, S.L., que le respetó los derechos y obligaciones laborales y la antigüedad que hasta la fecha tenía perfeccionada en dicho centro de trabajo como



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTIZIA

trabajadora de la empresa saliente y según el convenio vigente.

Mantelnor no se aprovechó de ningún medio material procedente de Linorsa.

SÉPTIMO.- Al momento de cesar en Linorsa, quedaban pendientes de liquidación las siguientes sumas: 1º paga de beneficios-marzo de 2015: 1.906 euros; 2º salario del mes de abril de 2016: 1.351, 47 euros; 3º parte proporcional de paga extra de beneficios de 2016: 571, 86 euros; 4º parte proporcional de paga extra de julio de 2016: 1.524, 97 euros; 5º parte proporcional de paga extra de octubre de 2016: 41, 25 euros; 6º parte proporcional de paga extra de navidad de 2016: 571, 86 euros; 7º vacaciones:648, 79 euros.

OCTAVO.- Con posterioridad la actora ha percibido como crédito contra diversas cantidades, ascendiendo el monto de lo adeudado a 5.233 euros.

NOVENO.- Presentada papeleta de conciliación el día 18 de julio do 2016, el acto tuvo lugar el 4 de agosto con el resultado de tenerse intentada sin avenencia y sin efecto. La demanda ha sido interpuesta el 10 de agosto de 2016.

DÉCIMO.- La empresa Linorsa se halla en situación de concurso de acreedores en virtud de auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil Nº 3 de Pontevedra de fecha 19 de abril de 2016, que ha designado como administradora concursal a la entidad Convenia Profesional SLP.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMEIRO.- La cuestión sometida a consideración judicial versa sobre el derecho de la accionante a percibir una serie de cantidades que al momento de ser traspasada a la empresa Mantelnor quedaron pendiente de liquidar por parte de Linorsa.

La administración concursal de Linorsa reconoce que el monto total de la deuda contraída por dicha empresa asciende a 5.233 euros, según desglose que detalla oralmente en el acto del juicio. Por su parte, la empresa Mantelnor, alega excepción de falta de legitimación pasiva dado que el débito reclamado en demanda debe su causa a un período de prestación de servicios anterior a incorporarse la actora en su estructura, luego tales eventuales impagos habrá de asumirlos la anterior contratista al haberse generado esa deuda mientras la actora permaneció bajo su disciplina, sin que el fenómeno subrogatorio regulado en convenio incluya una cláusula de garantía que imponga a la nueva contratista la asunción de deudas anteriores a la ejecución del servicio.

SEGUNDO.- Por lo que atañe a la deuda reclamada, las sumas pendientes de abono salarial al momento de consumarse la cesión entre contratistas han de atenderse a las cantidades



reconocidas por la administración concursal de Linorsa, consecuente con las nóminas aportadas y la jornada desarrollada por la actora así como los pagos atendidos por la administración concursal, como crédito contra la masa, sin que la parte actora, sobre quien recae el deber de probar los hechos constitutivos de su pretensión ex artículo 217.2 de la LEC, haya justificado la subsistencia de un débito superior, que en todo caso genera un interés por mora del 10 %, que en el caso de Linorsa se contrae hasta la fecha de declaración del concurso.

TERCERO.- En cuanto a la pretendida extensión de la responsabilidad solidaria sobre la actual prestataria del servicio de limpieza por deudas salariales contraídas por la contratista precedente, debemos partir que la figura en virtud de la cual asumió la demandada Mantelnor el servicio de limpieza al que estaba adscrita la actora ha sido la de cesión del contrato administrativo, con arreglo al artículo 226 de la Ley de Contratos del Sector Público que prevé la subrogación del cesionario de cuantos derechos y obligaciones correspondiesen al cedente, habiendo condicionado el Concello de Vigo su autorización a que opere desde la fecha de inicio de ejecución del contrato, apelando a la necesidad de salvaguardar el interés público y ello atendiendo ante el temor, ciertamente infundado pues la actividad profesional de limpieza bajo ningún concepto puede catalogarse como propia actividad de un Ayuntamiento, de que dicho ente local llegara a tener que responder de forma y directa de las deudas salariales contraídas por la anterior arrendataria del servicio por imperativo del artículo 42 del ET.

En cuanto a la cesión de contrato, las empresas involucradas optaron, en cambio, por situar la fecha de efectos de la cesión el día 20 de abril de 2016 y liberando Linorsa a Mantelnor de toda obligación por ella adquirida con el personal contratado, cabiendo subrayar que dicha cesión está contemplada en el artículo 17 del Convenio Sectorial estatal como una de las modalidades de cambio de contratista o de subcontratista que contempla el derecho a la subrogación, la cual no debemos confundir con un supuesto de sucesión empresarial del artículo 44 del ET en que expresamente se estipula esa garantía salarial respecto de deudas contraídas por la empresa cedente y así lo ha clarificado nuestra jurisprudencia, con mención de las Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de septiembre, 1 de junio, 10 de mayo y 7 de abril de 2016, sino de sucesión de contratistas de conformidad con el artículo 17 del Convenio Colectivo de Limpieza, que han considerado que el precepto convencional a la conservación del contrato de trabajo en la nueva empresa y a mantener las anteriores condiciones laborales - derechos y obligaciones - que los trabajadores tuvieron en la empresa saliente, equivale a la garantía establecida en el artículo 44.1 del ET, pero no regula el convenio la garantía regulada en el artículo 44.3 del ET, es decir, la responsabilidad solidaria de la nueva



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTIZIA

empresa respecto a obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido satisfechas.

Sentado lo anterior, no debemos obviar que uno de los supuestos de subrogación que viene siendo admitido en nuestro derecho es el de la sucesión empresarial impuesta por la administración comitente y en este caso la misma ha perfilado claramente las condiciones en que debería llevarse a efecto el mecanismo de la cesión de contrato imponiendo que la subrogación del cesionario en los derechos y obligaciones derivados del contrato deba producirse desde la fecha de inicio de ejecución del mismo y además opta por tal solución ante la eventualidad de tener que afrontar una onerosa carga económica por los salarios que la anterior contratista pudiera adeudar a sus trabajadores, como así previene el informe emitido en fecha 7 de abril y que se incorpora dentro del contenido de la Resolución que aprobó esa operación de cesión de contrato, de la que se infiere el ánimo del Concello que tal subrogación en derechos y deberes, que implica colocarse en la posición jurídica del otro, incluya los de ámbito laboral.

Por consiguiente, por más que Linorsa y Mantelnor, apartándose de los términos de esa cesión, decidieran limitar la responsabilidad de la nueva contratista a todo cuanto acontecido antes del 20 de abril de 2016, tal acuerdo gozará de eficacia vinculante inter partes, pero no está dotada la fuerza necesaria frente a terceros, incluidos los trabajadores.

Por cuanto antecede, cumple hacer partícipe a Mantelnor de la deuda salarial contraída por Linorsa, incluido el interés por mora del 10 %, sumándose a la tesis mantenida por los Juzgados Nº 1 y de Refuerzo y dando por reproducida la jurisprudencia invocada en dichas resoluciones.

CUARTO.- De conformidad con la letra g) del apartado segundo del artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, contra esta resolución cabe interponer recurso de suplicación.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de S.M. EL REY,

FALLO

ESTIMAR PARCIALMENTE la demanda interpuesta por DOÑA [Nombre] contra el CONCELLO DE VIGO, las empresas LIMPIEZAS DEL NOROESTE, S.A. y MANTELNOR LIMPIEZAS, S.L.U., absolviendo por falta de legitimación pasiva ad causam al Concello de Vigo, S.A. y condenando solidariamente a las mercantiles LIMPIEZAS DEL NOROESTE, S.A. y MANTELNOR LIMPIEZAS, S.L.U. abonar a la actora la suma de cinco mil doscientos treinta y tres euros (5.233€) junto con un interés



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTIZIA

por mora del 10% que en el caso de Linorsa será hasta la fecha de declaración del concurso de acreedores.

Todo ello, con la intervención de la entidad CONVENIA PROFESIONAL SLP, como administradora concursal de la empresa LINORSA, y la convocatoria del FONDO DE GARANTÍA SALARIAL.

Se hace saber a las partes de su derecho a interponer contra esta sentencia Recurso de Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Social, que podrán anunciar ante este Juzgado en el plazo de cinco días, a partir de la notificación, por comparecencia o por escrito. Si la recurrente es la demandada no se le admitirá sin la previa consignación del importe de la condena que deberá ingresar en la cuenta de este Juzgado, abierta en BANCO SANTANDER, cuenta número 3630 0000 65 0696 16, o en caso de hacerse por medio de transferencia, ingrésese en la cuenta nº ES55 0049 3569 92 0005001274 y en el concepto hágase constar 3630 0000 65 0696 16, más 300 euros del depósito especial indicado en el artículo 229 y 230 de la LRJS. Ambos ingresos deberán efectuarse por separado en la misma cuenta corriente antes indicada, pudiendo la empresa sustituir el importe de la consignación por la constitución a disposición de este Juzgado de aval bancario por tiempo indefinido y con responsabilidad solidaria del avalista.

Líbrese testimonio de esta resolución para su unión a los autos principales y llévase el original al Libro de Sentencias de este Juzgado.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en la instancia, la pronuncio, mando, y firmo.